

TEMA 17. La Guerra Civil (1936-1939): Fases militares de la guerra. La evolución política y económica en las dos zonas. Las consecuencias de la Guerra Civil.

1. Fases militares de la Guerra Civil

Se pueden distinguir tres fases diferentes en el desarrollo bélico de la Guerra Civil:

a) Primera fase: desde el 17 de julio de 1936 hasta mediados de 1937.

El general Francisco Franco, que desempeñaba la comandancia general de Canarias, se trasladó en un avión costado por el millonario mallorquín Juan March desde Las Palmas hasta Marruecos. Allí se puso al frente del ejército de África, que era el cuerpo militar mejor preparado y entrenado de toda España y cuyos efectivos sumaban unos 50.000 hombres entre legionarios y mercenarios marroquíes. Durante los primeros días de la guerra, estas tropas lograron cruzar el Estrecho de Gibraltar en aviones alemanes e italianos para unirse a los sublevados en Andalucía, que estaban comandados por el general Gonzalo Queipo de Llano.

Las fuerzas militares sublevadas avanzaron hacia Madrid desde el norte –con mayores dificultades y a las órdenes del general Emilio Mola– y desde el sur, pero fueron contenidas en los alrededores de la capital y en la Sierra de Guadarrama. Esto supuso un importante revés para los insurrectos, que consideraban esencial la conquista de la ciudad de Madrid por razones políticas, económicas, diplomáticas, propagandísticas y simbólicas.

Los republicanos mantuvieron bajo control el 60% del territorio español, incluyendo los núcleos urbanos más poblados –Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Gijón– y las zonas más industrializadas del país. Por el contrario, las mejores y más extensas regiones ganaderas y productoras de trigo, patatas, legumbres y maíz fueron pronto ocupadas por los enemigos de la República. En el aspecto monetario, cada uno de los dos bandos emitió sus propios billetes y prohibió la circulación de las monedas del adversario.

Durante las primeras semanas de combate ya se comprobó que el ejército rebelde superaba en organización, disciplina y suministros al ejército republicano, que estaba formado básicamente por improvisados batallones mixtos de soldados, guardias y voluntarios civiles. Los generales Vicente Rojo –como Jefe del Estado Mayor republicano– y José Miaja –que se encargó de organizar la defensa de Madrid– fueron los militares más destacados en el bando gubernamental. También permaneció bajo la autoridad del gobierno republicano la mayor parte de los buques de guerra y submarinos, pero esta flota carecía de mandos eficaces y fue desaprovechada.

En la retaguardia de ambos bandos se desencadenó una violenta persecución con el propósito de exterminar a todos los adversarios. Los sublevados fusilaron a militantes de sindicatos y partidos del Frente Popular, alcaldes y dirigentes políticos republicanos y maestros de izquierdas, que muchas veces fueron descubiertos al ser delatados por sus mismos vecinos; también fueron ejecutados los militares que se negaron a secundar el alzamiento. Los sublevados liquidaron a más de 70.000 personas (de las que un 10% eran mujeres). Una de las víctimas más conocidas fue el poeta Federico García Lorca.

Por su parte, los milicianos anarcosindicalistas, socialistas y comunistas se lanzaron al asesinato de todos los odiados derechistas, clérigos, empresarios, terratenientes, burgueses, monárquicos y católicos que encontraron. Más de 50.000 civiles fueron ejecutados en la zona republicana. La violencia fue terrible y el miedo se adueñó de los habitantes de Barcelona y Madrid, donde las víctimas eran sacadas de sus domicilios para ser «paseadas», es decir, ejecutadas en descampados y arrojadas a una zanja.

b) Segunda fase: desde mediados de 1937 hasta el verano de 1938.

Las tropas de Franco, que disponían de mejores abastecimientos de alimentos y armas, tomaron pronto la iniciativa y lograron conquistar toda la zona norte peninsular (Vizcaya, Santander y Asturias) en octubre de 1937. De esta manera, el bando republicano perdió importantes recursos económicos y el ejército franquista pudo disponer de las valiosas factorías industriales bilbaínas. Al mismo tiempo, fracasaron los tres intentos de ofensiva emprendidos por el ejército republicano en Brunete (Madrid), Belchite (Zaragoza) y Teruel, que dejaron cuantiosas pérdidas humanas y materiales.

Con el objetivo de quebrar la moral y la capacidad de resistencia del enemigo, la aviación franquista efectuó intensos bombardeos aéreos contra la población civil en Valencia, Madrid, Barcelona y también en la localidad vizcaína de Guernica, que quedó completamente destruida por el ataque de los aviones alemanes de la Legión Cóndor.

c) Fase final: desde julio de 1938 hasta abril de 1939.

En julio de 1938, el general Vicente Rojo planeó una audaz ofensiva en la zona del Ebro con el objetivo de forzar una retirada del ejército franquista y disminuir así la presión enemiga sobre Valencia y Cataluña. El mando de las tropas republicanas –80.000 soldados y más de 350 piezas de artillería– fue encomendado al joven coronel comunista Juan Modesto. Por su parte, el ejército franquista empleó en el contraataque 200 aviones y cerca de 500 cañones. En medio del intenso calor veraniego, los combatientes pelearon en las proximidades del río Ebro durante casi cuatro meses. En esta batalla murieron 6.500 soldados franquistas y los republicanos perdieron a unos 20.000 hombres, que fueron hechos prisioneros. Finalmente, la totalidad de Aragón y también Castellón fueron ocupados por el ejército de Franco, de forma que Cataluña quedó aislada y la zona bajo control republicano quedó cortada en dos.

Sin duda alguna, el fracaso de la acción ofensiva en el frente del Ebro durante el verano de 1938 dejó a la República prácticamente derrotada. En diciembre de 1938, las unidades militares antirrepublicanas penetraron en Cataluña y un mes más tarde ocuparon –sin encontrar apenas resistencia– la ciudad de Barcelona. En febrero de 1939, las desmoralizadas tropas republicanas se rindieron en Menorca sin presentar combate y Madrid cayó el 28 de marzo. La Guerra Civil española había terminado y según el general Vicente Rojo, «Franco había vencido por nuestros errores».

2. La evolución política y económica en la zona republicana

El levantamiento militar desencadenó un profundo **proceso revolucionario en la zona republicana**. El gobierno presidido desde el 19 de julio de 1936 por José Giral –que pertenecía a Izquierda Republicana– fue incapaz de imponer su autoridad y quedó desplazado de hecho por la aparición de nuevos centros de poder revolucionario de carácter local. Así, en los distintos pueblos y ciudades de la zona republicana se crearon diferentes comités revolucionarios populares que –dirigidos en algunos casos por anarquistas y en otras ocasiones por socialistas o comunistas– tomaron por la fuerza el control del poder y adoptaron las decisiones políticas, económicas y militares por su cuenta.

La situación era caótica y, desde el primer momento, **el bando republicano careció de unidad** política y, con el paso del tiempo, el desorden y las **divisiones internas entre los distintos partidos y organizaciones sindicales** se acentuaron. En algunas ocasiones, los anarquistas, los comunistas y los socialistas llegaron incluso a enfrentarse con las armas, como ocurrió en mayo de 1937 durante una refriega que duró cuatro días y concluyó con 400 muertos en las calles de Barcelona.

Los milicianos anarquistas entendían que vencer la guerra y completar la revolución socioeconómica debían ser procesos paralelos e inseparables. Por consiguiente, en los lugares que estaban bajo su control, acabaron con las propiedades privadas e impulsaron la colectivización de la tierra. Por ejemplo, en Aragón, los cenetistas se apresuraron a quemar los registros de propiedad, ocuparon por la fuerza las fincas y llegaron a colectivizar el 70% de la superficie cultivada; en la provincia de Jaén hicieron lo mismo con el 80% de las tierras; mientras que el 60% de las parcelas de Ciudad Real –cuyos anteriores propietarios habían huido o habían sido asesinados durante el verano de 1936– también fueron expropiadas y comunalizadas.

Por el contrario, los comunistas y los socialistas consideraban que el desarrollo de la revolución social era un obstáculo que podía restar eficacia al esfuerzo militar y por ello preferían aplazar la liquidación del sistema capitalista hasta derrotar al enemigo. En cualquier caso, en todas partes fueron confiscados y socializados casi todos los cines, teatros, hoteles, tiendas, bares, peluquerías, taxis, ferrocarriles, autobuses, así como todo tipo de fábricas, que pasaron a ser dirigidas por comités sindicales controlados por el PSOE, la CNT o el PCE.

La **vida cotidiana en la retaguardia republicana** estuvo marcada por el hambre, el absentismo laboral, los ataques aéreos y las continuas evacuaciones. Los alimentos básicos y los productos de primera necesidad pronto escasearon en las ciudades y fue necesario organizar un sistema de racionamiento de comestibles que no pudo impedir la extensión de la desnutrición entre la población civil. Además, las alarmas aéreas obligaron a la gente a refugiarse y permanecer largas horas dentro de los sótanos de los grandes edificios o en el interior de los

túneles del *metro* en Barcelona y Madrid (donde paradójicamente continuaron funcionando los teatros y los cines). Las autoridades republicanas también optaron por evacuar a 38.000 niños y enviarlos a Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Holanda, México y la URSS para que pudieran escapar de los horrores de la guerra.

Desde septiembre de 1936, el socialista Francisco Largo Caballero asumió la presidencia de un nuevo gobierno integrado por distintas fuerzas políticas (había ministros socialistas, comunistas, republicanos, anarquistas y también nacionalistas vascos y catalanes) e intentó reforzar la disciplina militar, frenar la colectivización de los medios de producción y posponer las experiencias revolucionarias para concentrar todos los esfuerzos en vencer la guerra.

Aprovechando el respaldo de la URSS, **los comunistas españoles fueron incrementando poco a poco su influencia**, situando a sus hombres en puestos clave e imponiendo así sus decisiones militares, ideológicas y políticas en la zona republicana. Esta tendencia se acentuó con la llegada a la presidencia del gobierno –en mayo de 1937– del socialista **Juan Negrín**, un catedrático de medicina canario que compartía los planteamientos del PCE y prescindió rápidamente de los ministros anarquistas (entre los cuales se encontraba la joven Federica Montseny, que se había encargado de la cartera de Sanidad y que fue la primera mujer en desempeñar un cargo ministerial en la historia de nuestro país).

También se produjeron numerosos conflictos entre las autoridades del gobierno republicano y los dirigentes nacionalistas catalanes y vascos. En repetidas ocasiones, Azaña, Prieto y Negrín reprocharon al presidente de la Generalitat –Lluís Companys– su escasa contribución al esfuerzo bélico conjunto y recriminaron al presidente del gobierno autónomo vasco –José Antonio Aguirre– por sus intentos de conseguir la independencia del País Vasco.

El desmoronamiento republicano se aceleró durante las semanas finales de la guerra. En febrero de 1939, Azaña presentó su dimisión como Presidente de la República y se marchó a Francia atravesando a pie la cordillera pirenaica. Pocos días después y en medio de una enorme confusión, el coronel Segismundo Casado –que había sido nombrado Jefe del Estado Mayor republicano poco antes– se rebeló en Madrid contra el gobierno de Negrín, quien con el respaldo de los comunistas pretendía prolongar la resistencia militar hasta el límite y se negaba a entablar negociaciones con el bando franquista. Por el contrario, la intención del coronel Casado –que fue secundado por el dirigente socialista Julián Besteiro y por el general José Miaja– era pactar una rendición con Franco, ya que se daba la guerra por perdida y se deseaba evitar posibles represalias por parte de los vencedores. En consecuencia, los republicanos del sector casadista terminaron enfrentándose a tiros contra los partidarios comunistas de Negrín en las calles de la ciudad de Madrid. Mientras tanto, las tropas enemigas que sitiaban la capital permanecían a la expectativa. En los combates hubo más de 1.000 muertos. Tras lograr imponerse, el coronel Casado –que ordenó el arresto de centenares de comunistas y el fusilamiento de dos altos mandos militares del PCE– se decidió finalmente a negociar la entrega de Madrid al ejército franquista. Al mismo tiempo, Juan Negrín y los principales dirigentes comunistas huyeron del país en avión.

3. La evolución política y económica en la zona sublevada

En principio, los sublevados carecían de un proyecto político definido para reemplazar a las instituciones republicanas en caso de un rápido triunfo. Sin embargo, la mayoría de los generales pronto comprendió la necesidad de unificar el mando de las tropas, de manera que todo el poder quedara acumulado en un único jefe para garantizar así una dirección estratégica más eficaz de las operaciones bélicas.

Por este motivo, los principales mandos militares antirrepublicanos (los generales Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Llano, Alfredo Kindelán, Fidel Dávila, Miguel Cabanellas, Luis Orgaz y Juan Yagüe entre otros) se reunieron en septiembre de 1936 y eligieron en una votación informal al general Francisco Franco como «jefe del Gobierno del Estado». De este modo, Franco se convirtió en el máximo dirigente con poderes ilimitados y absolutos tanto militares como políticos, puesto que se reservaba en exclusiva la capacidad para imponer disposiciones con rango de ley. Entre los **factores que favorecieron la rápida ascensión de Franco** –un gallego de 44 años de edad que poseía un carácter frío y reservado– a la dictadura unipersonal y al mando supremo indiscutido de los sublevados estaban sus espectaculares éxitos militares al frente del ejército de África durante las primeras semanas de combate, su habilidad para entablar contactos y obtener ayuda material de alemanes e italianos, y también la ausencia de posibles rivales, ya que otros generales de prestigio como José Sanjurjo, Manuel Goded o Joaquín Fanjul habían muerto al principio de la guerra.

A principios de 1937, Franco expresó su negativa a reponer en el trono a Alfonso XIII y encargó a su cuñado Ramón Serrano Súñer –que había sido diputado de la CEDA– la dirección de los asuntos políticos, de manera que Franco pudo concentrarse en la conducción militar de la guerra.

Desmontar el sistema parlamentario democrático y constitucional, derogar la legislación reformista republicana, defender los intereses socioeconómicos de los grupos que apoyaban el alzamiento y construir las bases de un nuevo Estado autoritario tomando como modelo el régimen fascista italiano fueron los objetivos inmediatos de las primeras disposiciones adoptadas por los sublevados:

- **Anulación de la Ley de Reforma Agraria**, devolución de las fincas expropiadas a sus antiguos propietarios y expulsión de todos los campesinos asentados en esas tierras.

- **Prohibición de todos los partidos políticos** y agrupaciones sindicales.

- Creación en abril de 1937 de un partido único y subordinado al Estado que fue denominado **Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET de las JONS)**. Su jefatura fue asumida por el general Franco quien, con esta maniobra, reforzó su posición de poder y logró poner bajo su control personal a todos los diferentes grupos políticos que conformaban el bando sublevado. Esta nueva fuerza política aportó al recién nacido Estado franquista sus símbolos (el escudo con el yugo y las flechas), canciones (el «Cara al sol»), vestuario (boina roja y camisa azul) y saludos (con el brazo alzado y la mano abierta y extendida).

- **Supresión del derecho de huelga** y declaración de la misma como un delito grave contra la patria.

- Anulación de la libertad de expresión y establecimiento de una estricta **censura** con el propósito de controlar el contenido y la difusión pública de todo tipo de textos escritos y editados en España o procedentes del extranjero.

- **Abolición de los Estatutos de autonomía regionales**, aunque se mantuvieron los sistemas fiscales especiales forales de Álava y Navarra, dos provincias que apoyaron la sublevación del 18 de julio y donde los carlistas poseían una fuerte implantación.

4. Las consecuencias de la guerra

A lo largo de la Guerra civil **murieron unos 450.000 españoles de ambos bandos** en los frentes de combate, en los bombardeos y en las actividades represivas. Sin embargo, ésta no fue la única repercusión demográfica del conflicto, ya que un elevado número de personas se vieron obligadas a huir del país por temor a las represalias franquistas. Se calcula que durante los tres primeros meses de 1939 **casi medio millón de refugiados** –entre los que se contaban cerca de 170.000 mujeres, niños y ancianos– cruzaron la frontera pirenaica para entrar en Francia. A México llegaron otros 22.000 exiliados.

Durante los primeros años de la posguerra, **las cárceles franquistas pronto se llenaron de personas acusadas por delitos políticos**. En 1940, había 18.000 mujeres y 240.000 hombres encarcelados. Se calcula que 48.000 individuos –entre ellos Lluís Companys– fueron juzgados por tribunales militares, condenados a muerte y fusilados durante la posguerra. En 1943, la cifra de prisioneros que se hacían hambrientos y enfermos en las celdas todavía superaba los 100.000. Mientras que otros 25.000 cumplían penas de trabajos forzados y participaban en la reparación de caminos y canales, o bien en la construcción de edificios públicos (como los Nuevos Ministerios de Madrid) y monumentos (como el Valle de los Caídos). En 1946, la cifra de presos políticos ya había descendido hasta los 15.000.

El gobierno de Franco también inició en 1939 una exhaustiva «purificación» del sector público para descubrir y expulsar a cualquier persona que hubiera estado afiliada a algún partido del Frente Popular o que hubiera combatido dentro del ejército derrotado. Así, miles de excombatientes republicanos, izquierdistas, demócratas, sindicalistas y otros individuos acusados de ateísmo o de pertenencia a la masonería fueron multados, castigados con la expropiación de sus bienes y despedidos de sus empleos en cualquiera de los sectores de la administración pública o del funcionariado (burocracia, ejército, policía, profesorado, judicatura). Los puestos que dejaron vacantes pasaron a ser ocupados por adictos al régimen franquista, por excombatientes del bando antirrepublicano y por afiliados a Falange. Pero la **depuración** alcanzó también a otros grupos profesionales como periodistas, abogados, médicos e incluso a los árbitros de fútbol. Más de 300.000 españoles fueron investigados, el 75% de los profesores universitarios fue sancionado y miles de maestros de escuela fueron inhabilitados definitivamente y suspendidos de empleo y sueldo.